



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: MARTHA LEONOR QUINTERO CASTAÑO
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 018 2019 00618 01
Sentencia: S-334

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S.A., al igual que conocer en CONSULTA a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 17 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARTHA LEONOR QUINTERO CASTAÑO demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar los aportes de

la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y todos los conceptos recibidos.

Pretende además el reconocimiento de la pensión de vejez, los intereses moratorios y las costas del proceso. Esta última pretensión, fue presentada en los siguientes términos:

"TERCERO: Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, a Reconocer la PENSION DE VEJEZ a la señora MARTHA LEONOR QUINTERO CASTANO, si al momento de proferir sentencia de fondo acredita los requisitos para acceder a la prestación, esto es, el 3 de mayo de 2022."

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 3 de mayo de 1965; que fue afiliada al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 3 de diciembre de 1984, completando en esa entidad 158.57 semanas de cotización; que se trasladó al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. el 1 de marzo de 1998; que en ese régimen tiene cotizadas 1097.14 semanas acumuladas hasta la presentación de la demanda en agosto de 2019; que en toda su vida laboral suma 1255 semanas; que en el momento del traslado el fondo privado no le suministró una información completa que incluyera el saldo que tenía que acumular para alcanzar una pensión de vejez, los requisitos para una pensión anticipada o la diferencia en la mesada pensional en cada régimen; que solicitó ante COLPENSIONES el traslado de régimen pensional y el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada según comunicación del 8 de agosto de 2019.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la afiliación de la demandante a esa entidad y el posterior traslado al RAIS, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a

su conocimiento en las que nada tuvo que ver. Se opuso a las pretensiones al no haber incumplido ninguna obligación legal, por cuanto la afiliación y posterior traslado se realizaron de forma correcta, cumpliendo lo establecido en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. Como excepciones propuso falta de causa para demandar, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante y la afiliación a esa entidad mediante la suscripción del respectivo formulario el 1 de marzo de 1998. Explica que en ese momento la orientó en debida forma suministrándole una asesoría objetiva, íntegra, clara y responsable sobre las características y diferencias de cada régimen, así como las consecuencias del traslado. Se opuso a las pretensiones agregando que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción e inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y el seguro previsional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 17 de mayo de 2022, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A., a quien le ORDENÓ trasladar a COLPENSIONES todos los valores recibidos con motivo de la afiliación, incluyendo los rendimientos financieros; ii) ORDENÓ además la devolución de las cuotas de administración, porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima y seguros previsionales; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas, reactivar la afiliación al RPMPD sin solución de continuidad e incorporarlos como

aportes pensionales en la historia laboral; iv) CONDENÓ a COLPENSIONES al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la Ley 797 de 2003, cuyo disfrute queda condicionado al retiro del sistema; v) y CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1 ´000.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de POTECCIÓN S.A. presentó recurso de apelación en cuanto a la orden de devolver al Régimen de Prima Media las cuotas de administración descontadas de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante el tiempo que estuvo afiliada a esa entidad, es decir desde el año 1998. Las deducciones por ese concepto se hacen de manera legal y válida por disposiciones normativas contenidas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, las cuales son aplicables y vigentes. Considera que si se continúa con la orden de devolver los gastos o cuotas de administración, se genera de manera directa un detrimento patrimonial en su contra y un enriquecimiento sin justa causa a favor de COLPENSIONES, ello teniendo en cuenta que por la naturaleza del funcionamiento del Régimen de Prima Media nunca se hubieran podido observar dichos rendimientos, no se observa un detrimento patrimonial en contra de la cuenta de ahorro individual de la demandante, por el contrario, se observan unos rendimientos significativos lo que incrementa el patrimonio de la cuenta de ahorro individual.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En el término concedido a las partes para alegar de conclusión, la apoderada de la demandante se pronunció solicitando se confirme la

sentencia de primera instancia de acuerdo al criterio jurisprudencial que sobre la ineficacia de traslado de régimen pensional ha desarrollado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia resolver los temas propuestos por la AFP PROTECCIÓN S.A. a través de su respectivo recurso de apelación, al igual que conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. MARTHA LEONOR QUINTERO CASTAÑO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PROTECCIÓN S.A. queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: *i)* MARTHA LEONOR QUINTERO CASTAÑO nació el 3 de mayo de 1965; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 3 de diciembre de 1984, acumulando en esa entidad un total de 157.86 semanas de cotización; y *iii)* el 1 de marzo de 1998 suscribió el respectivo formulario a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra vinculada actualmente.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no

se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del

régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de

suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada, sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales

es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda en cuanto que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la demandante acredita en la actualidad, y aun desde el fallo de primera instancia, la totalidad de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, pues teniendo en cuenta que nació el 3 de mayo de 1965, significa que los 57 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2022.

Y de otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado por la codemandada PROTECCIÓN S.A., actualizado hasta el mes de abril 2022, se evidencia que la actora acreditaba, para ese entonces, más de 1397.14 semanas cotizadas en toda su vida laboral,

las que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez se encuentra ajustada a derecho.

En este estado de la providencia, es necesario señalar que, en eventos anteriores con supuestos fácticos similares, esta Sala de Decisión consideró pertinente la declaratoria de la excepción de petición antes de tiempo, en la medida en que cuando se instauró la demanda el afiliado (a) no cumplía los requisitos para el reconocimiento de la prestación de vejez, los cuales solo se acreditaban en el curso del proceso, y en todo caso antes de proferirse la sentencia respectiva.

Al reexaminar la situación presentada, se estima procedente modificar tal postura, en el sentido de que la propia ley procesal general permite la adopción de decisiones en las que se tengan en cuenta hechos sobrevinientes en el curso del proceso, siempre que hayan sido alegados por la parte interesada y estén demostrados antes de dictarse la respectiva sentencia, como en este caso aconteció. (artículo 281 del CGP, inciso 3º). Lo anterior resulta factible y adecuado, por cuanto se están garantizando principios como los de economía procesal, además de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia, la seguridad social, la prevalencia de los derechos sustanciales y la garantía de los derechos mínimos e irrenunciables.

En un caso de contornos similares, la la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL-3707-2018, Rad. 50.665, señaló lo siguiente, según apartados que se avienen perfectamente al caso presente:

“En este orden, sin bien la accionante para cuando impetró la demanda inicial el 16 de marzo 2005, no cumplía con la densidad de semanas que la ley exigía para acceder a la prestación solicitada, tal requisito estaba satisfecho en fecha muy anterior a

cuando se profirió la sentencia del juzgado, lo que condujo a que en esta se le otorgara la pensión de vejez con base en las mil semanas que regula el artículo 12 del Acuerdo 049/90.

Así las cosas, nos encontramos ante un hecho sobreviniente que no podía ser desconocido por el juzgador de alzada, puesto que la prestación aquí deprecada tiene el carácter de un derecho mínimo e irrenunciable, conforme a lo establece el artículo 48 de la C.N., y en esa medida, este debe hacerse prevalecer, debiendo tenerse en cuenta, que se trata de la misma pretensión contenida en la demanda inaugural, la pensión de vejez, la que si bien para cuando se presentó la acción no reunía los requisitos en cuanto a densidad de semanas, ello se surtió en el trámite del mismo.

Lo anterior, tiene respaldo además en el inciso final del artículo 305 del CPC, vigente para la época cuando se profirió la decisión de segunda instancia, hoy 281 del CGP, el cual preceptúa: **«En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio»** (Negrillas fuera de texto original), lo cual tiene como propósito que las decisiones judiciales no resulten reñidas o ajenas a la realidad. (CSJ SL, 27 feb. 2007, rad. 28884).

Sobre este aspecto, se pronunció también la Sala en la sentencia CSJ SL, 18 sep. 2000, rad. 14214, reiterada en la CSJ SL16805-2016, en donde se asentó:

“En cuanto al otro aspecto de la acusación, se recuerda que esta Sala en Sentencia del 10 de agosto de 1999 (Radicado 14165) expresó lo siguiente:

“... en los procesos laborales es aplicable el artículo 305 del CPC en tanto prevé, en casos como el aquí estudiado la obligación del sentenciador de tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y allegado regularmente antes de que el expediente entre a despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

Debe recordarse entonces, que corresponde a los jueces en las instancias garantizar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CN), sobre las meras formalidades, cuando se advierta una situación que genera injusticias, fraudes procesales de los litigantes, o porque se trata de hechos sobrevinientes ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, siendo precisamente esta última situación la que aquí se evidencia, pues se itera, la actora en el curso de la primera instancia y antes de emitirse el respectivo fallo, acreditó tener la densidad de semanas que el artículo 12 del Acuerdo 049/90, exige para obtener la pensión de vejez, esto es, 1000 en cualquier época, lo cual constituyó el fundamento del juez para otorgar dicha prestación.

Lo expuesto lleva a concluir, que el Tribunal incurrió en el dislate jurídico que se le atribuye por parte del censor, al declarar oficiosamente la excepción de «petición antes de tiempo», sin observar el derecho que le asistía a la actora a la pensión reclamada, y que debía hacerse prevalecer sobre los aspectos meramente formales, que en últimas lo condujeron a tomar la decisión ahora atacada."

También se comparte lo que tiene que ver el disfrute de la prestación, tema frente al cual aplica la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema. Incluso, el fundamento para adoptar esa decisión no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el valor final de la prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que la señora MARTHA LEONOR en la actualidad continúa realizando cotizaciones, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, 4 meses después de recibidos los dineros de la cuenta individual que la demandante posee en PROTECCIÓN S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación una vez se acredite el retiro, tal y como fue ordenado en primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`000.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 17 de mayo de 2022, pero la **ACLARA** en el sentido de advertir que le corresponderá a COLPENSIONES, 4 meses después de recibidos los dineros de la cuenta individual que la demandante posee en PROTECCIÓN S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación una vez se acredite el retiro, tal y como fue ordenado en primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **75b5726b76c7d11b2d81e0018ed8db9ae877c0d666453a409f6a3cd3283cf797**

Documento generado en 15/12/2022 12:01:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>